

Estados Unidos no son la administración Reagan

La administración Reagan tiene de momento ideas muy precisas sobre El Salvador. Se reducen a las siguientes: El Salvador es un caso importante de la confrontación Este-Oeste; el movimiento revolucionario es el resultado de la acción y la agitación comunista de Moscú, vía La Habana y Nicaragua; la Junta militar democristiana puede aplastar la rebelión, manteniendo apariencias democráticas, que hagan más difícil la condena mundial sobre la gigantesca y cruel represión de los derechos humanos; se dará toda la ayuda militar y toda la intervención yanki que sea necesaria para derrotar al FDR-FMLN sin importar el número de víctimas, la prolongación del conflicto o la destrucción de recursos; se dará ayuda económica para que El Salvador no se hunda, pues esto llevaría a las masas al borde de la insurrección y a los brazos de la izquierda; se jugará con las elecciones a largo plazo para dar la apariencia de una solución política a algo que se está seguro no puede subsistir sin solución militar; los derechos humanos pueden esperar a momentos mejores, pues la guerra es la guerra y los intereses norteamericanos son los intereses norteamericanos.

Hasta aquí la administración Reagan. Pero Estados Unidos no es la administración Reagan. Y ya se están dando respuestas firmes del pueblo americano y de sus representantes en el Congreso. Veamos algunas de estas respuestas más significativas.

1) Están, ante todo, las restricciones en la ayuda militar y en las ventas exigidas por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (H.R. 3566 y S.R. 869, res-

pectivamente). Aunque las cinco condiciones propuestas por cada uno de los comités no tienen la misma redacción coinciden en lo fundamental y las dos gozan de obligatoriedad.

Son las siguientes: a) que el gobierno de El Salvador no esté comprometido en un permanente esquema de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y que haga progresos significativos en controlar la indiscriminada violación de los mismos; b) que logre un control sustancial sobre todos los elementos de su propia fuerza armada, de modo que ponga fin a la tortura indiscriminada y al asesinato de ciudadanos salvadoreños por las fuerzas armadas; c) que siga haciendo esfuerzos por implementar reformas políticas y económicas esenciales, incluyendo la reforma agraria (los representantes añaden también apoyo al sector privado); d) compromiso de elecciones en fecha próxima; e) mostrar su disponibilidad de negociar con grupos de la oposición una solución política del conflicto que sea equitativo (los senadores puntualizan con grupos que renuncien y refrenen oposición activa militar o paramilitar ulterior).

En resumen estamos ante exigencias oficiales que, por un lado, indican cuál es el juicio de senadores y representantes, encargados corporativamente de los asuntos exteriores de USA y, por otro, su propósito de cortar la ayuda si no se corrigen esos graves defectos del gobierno de El Salvador, de los cuales no se les prevendría, si no los estuviera cometiendo.

2) Está también la carta del Senador Mark O. Hatfield sobre el comunicado de la Fuerza Armada de El Salvador en el que se daba la lista

de 138 nombres, a los que se consideraba como terroristas. Es una carta dirigida a Haig, el Secretario del Departamento de Estado, fechada el 10 de mayo de 1981. En ella se dice que hay un fuerte deseo para una paz negociada en El Salvador, participado por nuestros aliados, nuestros vecinos en el hemisferio occidental y por una mayoría del Senado de los Estados Unidos. Observadores del conflicto están de acuerdo en que elementos poderosos dentro de las Fuerzas Armadas salvadoreñas constituyen un obstáculo importante para este objetivo. Lo cual se comprueba con la susodicha lista. ¿Cómo es posible, se pregunta el senador, que esa lista incluya intelectuales, sacerdotes y personas que anteriormente han estado en el gobierno y han demostrado respeto por las instituciones democráticas y aun condenado la violencia continuada como solución del conflicto de El Salvador? ¿Cómo se puede aceptar que se pueda considerar culpable a alguien antes de que pruebe su inocencia? ¿Cómo se puede explicar la complicidad del Departamento de Estado al no condenar públicamente la presentación oficial de esta lista, en la que están hombres plenamente democráticos y que serían piezas necesarias para un arreglo democrático del conflicto? El silencio oficial de USA en este punto puede llevar a la conclusión de que USA no está comprometida genuinamente con el propósito de alcanzar un arreglo pacífico de la crisis de El Salvador (I fear that this development can only lead to conclude that the U.S. is not genuinely committed to pursuing a peaceful settlement to the crisis in El Salvador).

3) También es significativo el rechazo de Lefever por parte de la comisión senatorial correspondiente como Subsecretario de Estado adjunto para los derechos humanos. Ha sido la primera gran derrota de Reagan y por un margen de votos aplastante, que obligó al candidato a retirar su nombre para el puesto. Y ha sido derrotado por su cínica postura ante la cuestión de los derechos humanos: nada de quejas públicas contra las mayores violaciones de los derechos humanos, si son hechas por países declaradamente anticomunistas. Y no olvidemos que esta actitud pragmática, que otros preferirían llamar, desvergonzada, es la política propuesta por el Comité de Santa Fe y demás consejeros de Reagan.

4) Por lo que toca a la cuestión económica, tenemos el testimonio del Subsecretario de Estado para la asistencia en cuestiones de seguridad, ciencia y tecnología, James L. Buckley, ante el

Subcomité de Operaciones Exteriores y el Comité de Apropiaciones. Su testimonio es del 29 de abril, 1981, con la pretensión de que se reprogramen los fondos de asistencia FY-81 en beneficio de El Salvador. Se trata, según el Subsecretario, de una necesidad urgente. Su propuesta es de \$24.9 millones para que el sector privado pueda importar materiales y equipo necesarios para revitalizar la producción industrial y agrícola; \$13.5 millones para financiar importación de alimentos; \$8 millones extra, que se añaden a los 22 millones ya disponibles para financiar importaciones industriales y agrícolas, porque las líneas de crédito de los bancos comerciales están exhaustas por la inseguridad y la violencia políticas (Comercial bank lines of credit to El Salvador have dried up as a result of political violence and uncertainty); otros \$7.1 millones para nuevos créditos a los programas agrícolas ya existentes y para obras públicas que utilicen intensivamente mano de obra; finalmente otros \$10 millones para construir casas populares en dos ciudades de El Salvador.

Lo importante viene ahora. La necesidad de ayuda económica es apremiante. El PNB en 1980 cayó un 9% respecto del de 1979. Las entradas por exportación han caído drásticamente. Se estima que el intercambio comercial con el exterior en 1981 arrojará un déficit de \$150 millones. Podría ser todavía mayor. "Un fallo de nuestra parte en responder rápidamente con esta ayuda adicional que estamos pidiendo, supondría un golpe devastador a la economía y quizá arrastraría la caída del gobierno de Duarte y con ello el fin de las esperanzas en favor de la reforma social y económica así como de la solución pacífica del conflicto a través de elecciones. El sector privado perdería la esperanza en el futuro del país y abandonaría todo apoyo al gobierno. La producción declinaría todavía más. Podría darse seria escasez de alimentos. El gobierno se vería forzado a detener el progreso en la reforma agraria. El aumento del hambre, de la pobreza y del desempleo podría conducir a una polarización política mayor. Estados Unidos parecería como quien está buscando una solución militar".

La guerrilla pretende paralizar la economía del país. Sus sabotajes han afectado a una tercera parte del suministro eléctrico. El presidente Duarte estima que el sabotaje económico supone una destrucción mensual por valor de unos \$15 millones. La ayuda americana no iría a recomponer los daños del sabotaje sino a fomentar la



economía, permitiendo que los recursos del gobierno se dediquen a reconstruir la infraestructura destruida por la guerrilla y estimular la construcción que dé trabajo a los desempleados.

Tenemos, pues, que la propia administración Reagan reconoce la catastrófica situación económica de El Salvador y el impacto de las guerrillas en la marcha del país.

5) Finalmente, conviene recordar la protesta masiva del pueblo norteamericano contra la ayuda militar a El Salvador y, más en general, a los países y gobiernos que violan los derechos humanos. Así tenemos las declaraciones de la Conferencia Episcopal de USA y de sus equivalentes entre los protestantes. La marcha multitudinaria, no igualada desde el tiempo de las protestas contra la guerra de Vietnam, tomada en Washington el 3 de mayo. Y es asimismo significativa la encuesta del *Time*, que en un contexto de aprobación general a la administración Reagan, una mayoría rechaza la ayuda militar a El Salvador, a

pesar de la propaganda oficial sobre el carácter marxista de la oposición.

Nos encontramos así con toda una serie de pruebas de cuán débil es la posición de Reagan en su política hacia El Salvador, no sólo por lo poco que está consiguiendo en resultados positivos referentes a salvar la crisis económica de El Salvador, a pesar de la ayuda sin precedentes que está dando, así como en lo referente a la derrota militar de la oposición a pesar de una ayuda también sin precedentes, sino porque en su propio país se hace cada vez más fuerte una oposición a esa política. Oposición alimentada no por propaganda artificial sino por la realidad misma, que, cuanto mejor conocida, es mejor argumento para criticar primero y para impedir después un intervencionismo norteamericano, que en opinión de López Portillo no hace sino prolongar la agonía del pueblo salvadoreño.

E.B.